



Atribución-NoComercial 2.5 Colombia (CC BY-NC 2.5)

La presente obra está bajo una licencia:

Atribución-NoComercial 2.5 Colombia (CC BY-NC 2.5)

Para leer el texto completo de la licencia, visita:

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/co/>

Usted es libre de:



Compartir - copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra

hacer obras derivadas

Bajo las condiciones siguientes:



Atribución — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciante (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o que apoyan el uso que hace de su obra).



No Comercial — No puede utilizar esta obra para fines comerciales.

**RESPONSABILIDAD EL ESTADO COLOMBIANO POR DEFECTUOSO
FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ¹**

Angy Paola Munar Salgado ²

Resumen

La presente investigación jurídica, analiza por medio del método sistemático, dogmático y hermenéutico el título de imputación que ha sido considerado como procedente en el sistema jurídico colombiano para solicitar al Juez Contencioso Administrativo la reparación de los daños antijurídicos y consecuentes perjuicios causados a particulares por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Lo anterior, teniendo como sustento la doctrina que ha sido proferida por diversos los autores y juristas en el ámbito jurídico al respecto, las disposiciones normativas que han sido expedidas por el órgano legislativo – también conocido como Congreso

¹ La presente investigación jurídica ha sido realizada por la autora con la finalidad de cumplir con los lineamientos establecidos por el Doctor Manuel Asdrúbal Prieto Salas – Director trabajo de grado – y por el Centro de Investigaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia, para optar por el título de Abogada.

² Estudiante de Derecho de la Universidad Católica de Colombia, identificada con código de estudiante 2108870, con cédula de ciudadanía número 1.030.579.529. Teléfono: 3103063094. E mail: apmunar70@ucatolica.edu.co. Bogotá D.C. Colombia.

Responsabilidad el Estado colombiano por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia

de la República – en ejercicio de sus funciones constitucionales que, en conjunto integran y conforman el régimen de responsabilidad estatal en el modelo escalonado de normas del sistema colombiano, así como la jurisprudencia que ha emitido el Consejo de Estado – máximo órgano de la Jurisdicción Contencioso Administrativa – y la Corte Constitucional respecto de la cláusula general de responsabilidad contenida en el artículo noventa superior.

Palabras clave: Responsabilidad del Estado; Imputación jurídica; Falla en el servicio; Daño Antijurídico; Perjuicios; Administración de justicia.

**RESPONSIBILITY THE COLOMBIAN STATE FOR DEFECTIVE FUNCTIONING OF
THE ADMINISTRATION OF JUSTICE ³**

Angy Paola Munar Salgado ⁴

Abstract

The present legal investigation, analyzed by means of the systematic, dogmatic and hermeneutic the title of imputation that has been considered in the Colombian juridical system to ask the contentious administrative judge the reparation of the anti legal damage and consequential damages caused to individuals by the defective functioning of the administration of justice. The foregoing, having as sustenance the doctrine that has been made by various authors and jurists in the legal field, the normative provisions that have been issued by the legislative body – also known as the Congress of the Republic – in Exercising its constitutional functions, which together integrate and form the State responsibility regime in the step model of Colombian system standards, as well as

³ This legal investigation has been carried out by the author with the purpose of complying with the guidelines established by Dr. Manuel Asdrúbal Prieto Salas – Director of the degree work – and by the Research Centre of The Faculty of Law of the Catholic University of Colombia, to opt for the title of lawyer.

⁴ Law student of the Catholic University of Colombia, identified with student code 2108870, with citizenship card number 1.030.579.529. Phone: 3103063094. E Mail: apmunar70@ucatolica.edu.co, Bogotá D.C. Colombia.

the jurisprudence issued by the State Council – the highest organ of the Contentious administrative jurisdiction – and the Constitutional Court with respect to the general clause of liability contained in article ninety superior.

Key words: State responsibility; Legal imputation; Service failure; Anti Legal damage; Damages; Administration of justice.

Tabla de Contenido

Resumen	2
Abstract	4
Introducción	7
1. Análisis dogmático, filosófico y hermenéutico de la naturaleza de la responsabilidad estatal en el ordenamiento jurídico colombiano.	10
2. La administración de justicia, la resolución de controversias y el control del ordenamiento jurídico legal y constitucional.	27
3. Medios de control y defectuoso funcionamiento de la administración de justicia	34
Conclusiones	37
Referencias	39

Introducción

Con la promulgación de la Constitución Política de 1991, se estableció en el contexto jurídico colombiano el derecho a una justicia célere y eficiente, dicho postulado fue estipulado por el constituyente derivado – es decir, por la Asamblea Nacional Constituyente – dentro del plexo constitucional en el artículo 228 en el cual se estipula de forma expresa los principios de celeridad y eficacia que, como mandatos optimizadores del sistema se deben aplicar o mejor, se deben tener en cuenta en el desarrollo de todas las actuaciones judiciales.

En efecto, la actualización normativa realizada a la norma superior en el año de 1991 le otorgó especial importancia a los principios de celeridad y eficacia, pues, los estableció en el sistema como mandatos de categoría superior, que de forma simultánea actúan como garantías tendientes a lograr el cumplimiento real y efectivo del debido proceso – aplicable a todos los procesos judiciales – y del derecho del acusado a ser juzgado sin dilaciones indebidas. No obstante, en la praxis judicial se han venido presentando gran cantidad de casos en los cuales se han causado daños antijurídicos a los particulares por la acción o la omisión de las autoridades públicas, entre las cuales se encuentran las judiciales, quienes al administrar justicia pueden ocasionar daños antijurídicos a los individuos o partes en el proceso, que están en el deber de reparar.

Dichos daños contrarios al orden jurídico que los sujetos no están obligados a soportar desde el paradigma dogmático y desde la perspectiva del derecho administrativo colombiano resultan ser imputables al Estado, en tanto, los causantes de estos son los agentes judiciales, sin embargo, lo realmente trascendental de la premisa antes mencionada no es la determinación de la

responsabilidad estatal – pues, dentro del plexo constitucional se estableció de forma expresa la denominada cláusula general en la cual se estipula que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables – sino la determinación del título de imputación procedente para solicitar la reparación patrimonial de los daños antijurídicos causados al juez contencioso administrativo. Lo anterior teniendo en cuenta no es suficiente el señalamiento de la existencia de un daño antijurídico, además, es necesario que se presente al operador judicial una relación de causalidad material entre el daño antijurídico y el órgano estatal por medio de la determinación del título de imputación aplicable.

Es por esta razón, que la presente investigación jurídica será realizada por medio del método de investigación deductivo, la cual tendrá como objetivo fundamental determinar ¿Cuál es el título de imputación procedente para solicitar al juez Contencioso Administrativo colombiano la reparación de los daños antijurídicos causados a particulares por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia?

Para resolver el anterior problema de investigación será indispensable realizar en primer lugar un análisis dogmático y hermenéutico de la responsabilidad estatal en el ordenamiento jurídico colombiano, para lo cual será indispensable estudiar los antecedentes históricos de la responsabilidad Estado, la transición del Estado Absolutista al Estado Social y Democrático de Derecho, así como las diversas perspectivas y posturas de tipo filosófico que sustentan y fundamentan el establecimiento por parte del constituyente derivado – o Asamblea Nacional

Constituyente – de la denominada cláusula general de responsabilidad estatal en el plexo constitucional colombiano y de los títulos de imputación jurídica.

Posteriormente, se analizará la resolución de controversias y el control del ordenamiento jurídico legal y constitucional efectuado por medio de la administración de justicia, para lo cual será indispensable realizar un examen dogmático y hermenéutico del concepto de administración de justicia y de función judicial. Luego, se presentará al lector un análisis de la responsabilidad estatal por daños antijurídicos causados por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, evento en el cual será imperativo estudiar de forma relacional el concepto de los títulos de imputación jurídica, de daño antijurídico y de perjuicios.

Finalmente, se realizará un análisis práctico del medio de control de reparación directa en el sistema jurídico colombiano, para esto será indispensable ahondar de forma breve en el concepto que la doctrina jurídica especialista en derecho público ha aportado al mundo jurídico respecto de los medios de control y respecto de los presupuestos procesales que se deben tener en cuenta para poner en funcionamiento el aparato judicial. Luego, se analizará de forma exclusiva el medio de control de reparación directa para esto, por medio del método hermenéutico se analizará el marco normativo vigente así como sus presupuestos procesales.

1. Análisis dogmático, filosófico y hermenéutico de la naturaleza de la responsabilidad estatal en el ordenamiento jurídico colombiano.

La determinación del juicio de responsabilidad extracontractual del Estado colombiano, es un proceso que se ha caracterizado por analizar tres aspectos fundamentales, por un lado, se encuentra el estudio del daño, por otro lado, se encuentra el análisis de la imputación y, como elemento transversal a los dos conceptos antes mencionados se encuentra el fundamento filosófico y dogmático de la responsabilidad. Dichos aspectos, se constituyen – según lo preceptuado por la doctrina jurídica que ha sido proferida al respecto – como elementos esenciales e indispensables que necesariamente deben concurrir para que proceda la declaración de responsabilidad del Estado, al respecto Saavedra explica que:

Generalmente se considera que para que exista responsabilidad se requiere la ocurrencia de un daño que afecte la integridad física, moral o patrimonial de una persona, la actuación de un sujeto y la existencia de un nexo causal que permita imputar, es decir, atribuir el daño a la conducta del sujeto (...) la responsabilidad administrativa requiere la existencia de una daño o perjuicio, la actuación de la Administración y un nexo causal entre el daño y la actuación administrativa (2005, p. 201)

Más adelante, explica el citado autor que “la actuación de la Administración constituye uno de los elementos necesarios para atribuirle responsabilidad, es decir, para imputar el daño según el nexo causal existente entre tal actuación y el daño” (Saavedra, 2005, p. 229), por lo cual es dable inferir que la actuación administrativa puede ser evaluada y analizada teniendo como sustento los presupuestos sobre los cuales se estructura la responsabilidad. Por tal motivo, en esta parte inicial

de la investigación se analizará de forma primigenia el fundamento dogmático y filosófico que ha justificado y motivado la incorporación del régimen de responsabilidad del Estado por parte del constituyente derivado en el plexo constitucional colombiano.

Acto seguido, se examinará la teoría del daño antijurídico desde la perspectiva de los diversos autores y juristas que han creado obras jurídicas consideradas como fuentes primarias en la materia y, se estudiará el concepto de imputación en el marco del derecho administrativo, así como sus elementos estructurales, lo cual permitirá por un lado, realizar un examen de tipo o categoría hermenéutica de la cláusula general de responsabilidad estatal establecida de forma expresa en el artículo noventa de la Constitución Política de Colombia, y por otro lado, concluir examinando de forma integral los tres elementos.

Como se mencionó, primero se analizará el fundamento dogmático y filosófico que ha sustentado la incorporación del régimen de responsabilidad del Estado en el sistema normativo colombiano. Para comenzar es necesario señalar que desde la perspectiva semántica – es decir, desde el punto de vista del estudio del significado de las palabras – el concepto responsabilidad del Estado se encuentra integrado por dos unidades lingüísticas que lo configuran como un concepto de tipo o categoría compleja, en vista de lo anteriormente señalado, es necesario analizar cada término de forma concreta, para que luego de que sean comprendidos de forma específica se proceda a estudiarlo de forma integral.

La unidad lingüística responsabilidad desde el paradigma o modelo semántico ha sido definida por la Real Academia Española como un “compromiso u obligación de tipo moral que

surge de la posible equivocación cometida por un individuo en un asunto específico. La responsabilidad es, también, la obligación de reparar un error y compensar los males ocasionados cuando la situación lo amerita” (Real Academia Española, 2014), es decir, desde esta perspectiva el término responsabilidad es un mandato de orden interno que, básicamente señala que las personas deben enmendar los daños que causen a los demás individuos, no obstante, dicha definición parece quedarse corta pues no incluye como sujeto al Estado y, además excluye la categorización jurídica de la responsabilidad al encuadrarla en el ámbito moral exclusivamente.

Ahora bien, desde la perspectiva jurídica ha sido definida la responsabilidad como aquella “relación entre un acto que produce un resultado dañoso y un sujeto, por virtud de cuya relación se imputan a este los efectos que el acto genera” (Ballesteros, 2007) o como aquella que:

Se genera cuando hay una norma que sanciona la conducta que es reprochable por el Estado puesto que perjudica a la sociedad; el sujeto que la realiza es al que se le aplicará la norma, esa obligación es la que genera en el sujeto la responsabilidad de reparar el daño (Kelsen, 1958, p. 75)

Es decir, es imperativa la existencia de una disposición normativa específica en el sistema normativo – que ha sido entendiendo como “un sistema deductivo de enunciados entre cuyas consecuencias lógicas hay por lo menos una norma que prohíbe, permite u obliga cierta acción” (Alchourron & Bulygin, 1991, p. 165) – que determine y establezca de forma previa aquellas situaciones que constituyen la obligación de reparar, considerada como “la manera como el responsable cumple con la obligación de asegurar a la víctima el retorno al *status quo ante* al acaecimiento del daño” (Henao & Ospina, 2015, p. 42). Lo anterior posee relación directa con el

principio de legalidad, el cual está caracterizado por una doble artificialidad “la del ser del derecho, de su existencia, y la de su deber ser, es decir sus condiciones de validez, así mismo positivizadas con rango constitucional, como derecho sobre derecho, en forma de límites y vínculos jurídicos a la producción normativa” (Ferrajoli, 2004, p. 67).

Para el tratadista Enrique Gil Botero, la institución jurídica de la responsabilidad está íntimamente unida a la noción de dignidad humana, que se puede rastrear en la obra *Antígona* de Sófocles, en la cual:

Se da en *Antígona* un deber ser vinculante con un contenido material que minimiza el cumplimiento de la ley, por ser inicua y por ir contra la esencia misma del hombre: su dignidad. Es por ello por lo que en toda obligación, el obligado es tomado como persona responsable” (2010, p. 14)

Por su parte el paradigma filosófico, aborda el análisis de la responsabilidad desde el punto de vista de la justicia correctiva; Uno de los autores más célebres en la materia es Aristóteles – polímata, filósofo, lógico y científico de la Antigua Grecia cuyas ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente por más de dos milenios – el cual en su obra *Ética a Nicómaco* dedica el Libro V enteramente al tema justicia, en el cual enaltece dicho concepto “como la virtud de las virtudes y la más perfecta, porque el que la posee puede hacer uso de ella con los otros y no sólo consigo mismo” (Aristóteles, 1992, p. 30).

Cumpliendo estrictamente con su rigor metodológico, empieza el capítulo primero señalando que respecto a la justicia y a la injusticia hay que “considerar a qué clases de acciones se refieren, y qué clases de término medio es la justicia y de qué extremos es término medio lo

justo” (Marías & Araújo, 1985, p. 4). Para su análisis, el filósofo parte de la fórmula de justicia a cada uno lo suyo y, subraya que la justicia como la injusticia tienen varios sentidos, a pesar de la cercanía entre ellos, por tanto si bien la justicia parece ser un término homónimo – es decir, un término que admite diversas significaciones – se pueden de algún modo delimitar éstas según el análisis de las causas, en otras palabras:

Parece que es injusto el transgresor de la ley, pero lo es también el codicioso y el que no es equitativo; luego es evidente que el justo será el que observa la ley y también el equitativo. De ahí que lo justo sea lo legal y lo equitativo, y lo injusto, lo ilegal y lo no equitativo (Acciarri, 2013, p. 432)

Es necesario tener en cuenta en este punto que para Aristóteles, la justicia como virtud total se llama justicia legal o universal y su finalidad u objetivo específico es velar por el bien de la comunidad política; por su parte la justicia como virtud parcial se denomina justicia particular y es aquello que pertenece privativamente a un individuo.

Dicha noción de justicia particular se encuentra integrada por las dos formas de justicia a las que el politólogo griego denominó y distinguió como justicia distributiva y justicia correctiva que, como se mencionó de forma previa sustentan o cimientan el análisis filosófico del concepto de responsabilidad. La justicia correctiva desde dicha perspectiva es aquella que tiene lugar en los modos de trato sean éstos voluntarios o involuntarios, por tanto, es necesario tener en cuenta que desde esta óptica “la ley sólo mira a la especie del daño y trata como iguales al que comete la injusticia y al que la sufre, al que perjudica y al perjudicado” (Bernal, 2013, p. 89) por tanto:

Parte de la igualdad aritmética, la ley sólo mira a la naturaleza del daño y tratará a ambas partes de igual manera, sea al que comete la injusticia o al que la sufre. Se aplica cuando uno adquiere más (o menos) que la propia parte legítima, como consecuencia de un daño causado a otra persona (Gardner, 2013, p. 45)

De ello es dable inferir que producido el daño, se pierde la igualdad entre las partes, por tanto hay uno que gana y otro que pierde, por tal motivo la justicia correctiva, sería el término medio entre la pérdida y la ganancia y, los jueces u operadores judiciales en sus decisiones tendrán como exclusiva finalidad buscar el término medio, es decir, la justicia, para así restablecer – o corregir – la igualdad perdida. En efecto, con la justicia correctiva, la relación que se establece entre la víctima del daño y el que causa el daño fuerza a que sean los elementos y especificadas de dicha relación los que determinen el tipo de tratamiento del daño, por lo tanto, la solución para el daño no puede dejar de ser bilateral.

Ahora bien, la unidad lingüística Estado ha sido definida por la doctrina jurídica especialista en derecho constitucional como “una unidad de asociación constituida por hombres que viven en un territorio que es producto de una síntesis mental (...) el Estado es un ente de la realidad de la cultura” (Porrúa, 1999, p. 145) en otras palabras, el Estado es “un ordenamiento jurídico para los fines generales que ejerce el poder soberano en un territorio determinado, al que están subordinados necesariamente los sujetos que pertenecen a él” (Ramírez, 2010, p. 37).

Su función o finalidad esencial es lograr la “organización y activación autónoma de la cooperación social territorial fundada en la necesidad histórica de un status vivendi común que

armoniza todas las disposiciones de intereses dentro de una zona geográfica” (Heller, 1942, p. 211). Es decir el Estado es el agrupamiento social en un territorio determinado y reconocido, constituido bajo la legitimidad de un poder político público, que posee una serie de normas en el modelo escalonado del sistema normativo que buscan mantener el orden social y los fines estatales. Según Santofimio el Estado “no puede ser otra cosa que la personificación del orden jurídico, no un poder extrajurídico, incontrolable o incontrolado (...) El Estado no puede ser más que generador de derecho, creador de orden jurídico al cual se encuentra sujeto y por él limitado” (Santofimio, 2004, p. 389)

Comprendidas cada una de las unidades lingüísticas que integran en conjunto el concepto de responsabilidad estatal, es necesario ahora ahondar en el análisis dogmático del concepto de forma general, no sin antes precisar que es un concepto que tiene su origen en el derecho francés, el cual especialmente desde el siglo XIX ha ido evolucionando de forma paulatina en favor de las víctimas, teniendo como fundamento la premisa de que “todo daño obliga a la persona pública, a la que le es imputable, a repararlo” (Oviedo, 1943, p. 366).

Para comenzar, es indispensable señalar que la responsabilidad estatal es un fenómeno que tuvo sus orígenes y se desarrolló principalmente en el Derecho civil, y que ha estado marcado por tres etapas. Inicialmente, se encuentra el periodo de la historia ubicado a finales del siglo XIX en el cual el Estado no respondía de ninguna manera por los daños que se causarían a las personas pues, en dicha época la concepción del principio de soberanía facultaba al Estado para imponer sus decisiones a los sujetos sin compensación alguna, los dirigentes elegidos para dirigir la

organización político administrativa afirmaban ser representantes de los dioses, por tanto, eran sujetos “incapaces de errar, repotentes ausentes de autocrítica, que condujeron a que las autoridades así constituidas, y dirigidas por el rey, a que se negaran a reconocer la existencia de la responsabilidad (Parra, 2003, p. 16), al respecto Saavedra afirma que:

En el mejor de los casos eran los agentes o servidores del imperio, reino, principado o república (según el momento histórico), quienes podían responder por los daños que causaba su conducta, pero se les aplicaban las normas de la responsabilidad civil, como entre particulares (2005, p. 25)

Luego, con la caída de las monarquías absolutistas y el consecuente triunfo de la ideología liberal que generó el comienzo del Estado de Derecho – en el cual “el Estado actúa, sujeto a la ley (principio de legalidad), y paga los perjuicios ocasionados a los individuos” (Jiménez & Soler, 2012, p. 29) – se empezó a cambiar en el ámbito jurídico la concepción antigua de irresponsabilidad del Estado, por la Teoría de la Responsabilidad Estatal.

En este punto es necesario tener en cuenta que las características generales del Estado de Derecho pueden concretarse fundamentalmente en “el imperio de la ley: ley como expresión de la voluntad general; división de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial; legalidad de la administración: actuación según ley y suficiente control judicial; derechos y libertades fundamentales: garantía jurídico-formal y efectiva realización material (Díaz, 1998, p. 28)

Al respecto, García de Enterría & Fernández señalan en su obra que dicha transición estableció una nueva concepción sobre la relación entre el Derecho y el poder político pues “el gobernante y sus agentes en el ejercicio del poder político ya no pueden disponer de este de manera

arbitraria y, por tanto, su actuación debe estar ajustada a la ley” (2004, p. 429), lo cual se relaciona con la idea de que el Derecho permite que una situación de hecho o de dominio se convierta en una situación de derecho, por lo tanto, “la justificación, cualquiera que ésta sea, hace del poder de mandar un derecho y de la obediencia un deber, es decir, transforma una relación de mera fuerza en una relación jurídica” (Bobbio, 1985, p. 29).

Posteriormente, con la expedición del Fallo Blanco proferido en 1873 por el Tribunal de Conflictos francés, se empezó a considerar que el Estado debía responder por sus actos y, por la falla o falta del servicio público, al respecto Dragó afirma que con este importante fallo “se estatuye la jurisdicción administrativa como la única competente para su conocimiento” (1986, p. 67), en efecto, es a raíz del célebre Fallo Blanco que se estableció en primer lugar, la responsabilidad del Estado por los daños causados por los servidores públicos a particulares; en segundo lugar, se estableció el carácter especial de este tipo responsabilidad, la cual no puede tener fundamento en los principios del Código Civil; en tercer lugar, se preceptúa que los procesos originados en este tipo de responsabilidad se resolverán obligatoriamente en la jurisdicción administrativa. Consagrando de esta manera de forma expresa el principio de responsabilidad estatal, al respecto, es necesario tener en cuenta que:

La sentencia subrayó principalmente que los daños causados habían sido originados colocación de un servicio público razón por la cual el competente para dirimir el conflicto de roles administrativos a partir de entonces la responsabilidad fundada la falta de servicio empezó a consolidarse pero hacía referencia una falta del servicio que no es necesario individualizar respecto determinada gente (García de Enterría & Ramón, 1986, p. 337)

En este punto es indispensable comprender que los principios desde el paradigma de la Teoría y Filosofía del Derecho han sido considerados como “razones para juicios concretos de deber ser” (Alexy, 1993, p. 83), o como “estándares que han de ser observados por ser una exigencia de justicia, equidad o alguna otra dimensión de la moralidad” (Dworkin, 1977, p. 72), que “ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes (...) por lo tanto son mandatos de optimización” (Alexy, 2003, p. 86).

En ese orden de ideas, es dable afirmar que la responsabilidad patrimonial del Estado tuvo su origen en el movimiento liberal que, en el proceso de lucha en contra de las ideas absolutistas propias de las monarquías concretaron el establecimiento del Estado de Derecho, al respecto, Parra anota que el:

Estado liberal clásico, surge formalmente la implantación de la responsabilidad patrimonial del Estado, pues predica y eleva a la categoría de derechos naturales, la libertad, la seguridad, y la propiedad, factores cuya violación generan necesariamente la restauración patrimonial del Estado (2003, p. 20)

Finalmente, hay una tercera etapa, en la cual se ha establecido que el Estado debe responder a sus administrados, en unos casos por aplicación de regímenes de responsabilidad subjetiva y, en otros bajo parámetros de responsabilidad objetiva, para esto se consideró necesario efectuar la creación de un régimen especial de responsabilidad administrativa o estatal que tuviera como premisa el hecho de que:

La responsabilidad que puede incumbir al Estado por los daños causados a los particulares por hechos de las personas que emplea el servicio público, no puede ser regida por los principios establecidos en el Código Civil para las relaciones de particular a particular; esta responsabilidad no es general ni absoluta, tiene reglas especiales que varían según las peculiaridades del servicio y la necesidad de conciliar los derechos del Estado con los intereses particulares (Penagos, 1997, p. 3)

En cuanto a su clasificación se determinó por un lado que el estudio de la responsabilidad estatal comprende “las fases precontractual, la contractual y extracontractual de las ramas legislativa, judicial y ejecutiva, sin embargo, dentro del marco del Estado moderno se mencionan otras clases de responsabilidad como la política la disciplinaria y la fiscal” (Penagos, 1989, p. 595) es decir, la responsabilidad del Estado aplica para todas las ramas del poder público antes, durante y fuera de la ejecución de un contrato estatal. Luego, se estableció que “la regla general es que la responsabilidad venga generada por actuaciones, hechos u omisiones realizadas por la administración pública” (Bascuñán, 1997, p. 365) y que, en materia de responsabilidad no existiera una diferencia entre el particular y el Estado, ambos están llamados, en igual forma a reparar al perjudicado, por tanto “a los dos les asiste la obligación de indemnizar perjuicios” (Henao, 1998, p. 30).

Contemporáneamente, se ha señalado que la responsabilidad patrimonial del Estado se declara siempre que concurren los siguientes elementos “un hecho dañoso imputable la administración un hecho sufrido por el actor que para estos efectos es quién los alegatos nexo causal que vincula estos dicha cosas esencial para concluir que el daño es consecuencia directa del

hecho atribuido a la administración” (Hinestrosa, 2016) y que, la responsabilidad extracontractual posee dos regímenes:

Uno objetivo en donde el daño sufrido por la víctima implica un desequilibrio justificada en las cargas públicas que soportar normalmente las personas por el hecho de vivir en sociedad y otro subjetivo en donde además de la demostración de la existencia de un daño se exige que para su imputación jurídica ese menoscabo haya sido causado por la acción u omisión predicable del Estado de sus agentes y que igualmente la víctima no tenga el deber jurídico de soportarlo (Henao & Ospina, 2015, p. 238)

Lo cual, conlleva a analizar conceptos como el daño antijurídico, el perjuicio y la imputación pues, como lo señala la doctrina constituyen elementos fundamentales en la atribución de responsabilidad al Estado. En primer lugar el daño antijurídico ha sido definido como “la alteración negativa de una situación favorable, que la víctima no está obligada a soportar” (Bernal & Fabra, 2013, p. 563), concepto jurídico es “la alteración negativa de un estado de cosas existentes” (Saavedra, 2003, p. 75) y por lo tanto es un concepto que “ se circunscribe a la acción humana (...) implica un cambio de un estado de cosas en el mundo” (Agudelo, 2013, p. 111). Según Hinestrosa el daño antijurídico es la razón de ser de la responsabilidad, y por ello, es básica la reflexión de que:

Su determinación en sí, precisando sus distintos aspectos y su cuantía, ha de ocupar el primer lugar en el proceso. Si no hubo daño no se puede determinar o no se le pudo evaluar hasta ahí habrá de llegarse; todo esfuerzo adicional relativo a la calificación moral de la conducta del autor resultarán necio e inútil (Hinestrosa, 2016, p. 26)

Por su parte, Escobar Gil escribe que en el lenguaje corriente la expresión daño significa “detrimento, menoscabo, perjuicio que a consecuencia de un acontecimiento determinado experimenta una persona sus bienes espirituales y corporales o patrimoniales” (Gil, 1989, p. 105), siguiendo dicha línea argumental el máximo organismo de la jurisdicción contencioso administrativa ha explicado que es indispensable que el daño sea:

Antijurídico, esto es, que la persona no tenga el deber jurídico de soportarlo; cierto, es decir, que se pueda apreciar material y jurídicamente —que no se limite a una mera conjetura—, y que suponga una lesión a un derecho, bien o interés legítimo que se encuentre protegido el ordenamiento jurídico, y personal, es decir, que sea padecido por quien lo solicita, en tanto se cuente con la legitimación en la causa para reclamar el interés que se debate en el proceso, bien a través de un derecho que le es propio o uno que le deviene por la vía hereditaria (Consejo de Estado, 2012)

Ahora bien, la imputación por su parte implica atribuir la responsabilidad de la ocurrencia del daño antijurídico al Estado, para lo cual es indispensable realizar un juicio de imputación, el cual, ha sido definido desde el paradigma doctrinal y desde la perspectiva jurisprudencial, a partir del artículo noventa de la Constitución Política el cual establece los elementos de la responsabilidad de la Administración Pública que, quedaron reducidos a la existencia de un daño antijurídico y a la imputación de este a una entidad o autoridad del Estado. Al respecto es necesario anotar que:

La imputación o la atribución de ese daño constituyen un proceso dirigido a establecer a quien se le puede atribuir la lesión o afectación que aquel representa. En ese orden de ideas, la imputación va más allá de la simple causalidad, puesto que esta última presupone la existencia del daño como una entidad material fenoménica (Gil, 2013, p. 473)

Lo anterior, posee especial relación con lo preceptuado por el Consejo de Estado en su jurisprudencia en donde se explica por un lado que “en la responsabilidad del Estado, la imputación no se identifica con la causalidad material, pues la atribución de la responsabilidad puede darse también en razón de criterios normativos o jurídicos” (Consejo de Estado, 1999) y por otro lado que “la imputación se rige por las normas jurídicas, se rige por un universo normativo” (Consejo de Estado, 2014).

Es decir, el juicio de imputación analiza o tiene en cuenta no solo el aspecto fáctico por acción o por omisión, sino que además examina el deber de reparar ya sea a título de falla del servicio – entendida como “un régimen de responsabilidad subjetiva, donde predomina la culpa de la administración por extralimitación de funciones, retardo en el cumplimiento de obligaciones, obligaciones cumplidas de forma tardía o defectuosa, o por el incumplimiento de obligaciones a cargo del Estado” (Orjuela, 2016, p. 3) – o a título de riesgo excepcional según el cual “si el riesgo llega a realizarse y ocasiona un daño, sin culpa de la víctima, hay lugar a responsabilidad de la Administración, así no haya habido falta o falla del servicio” (Causland, 2013, p. 521), o a título de daño especial, en donde es imperativo tener en cuenta “si existe una actuación lícita del Estado que, a pesar de ser desarrollada en interés público, causa un grave daño a una persona o grupo de personas que rompe la igualdad de los ciudadanos frente a las cargas públicas” (Henao & Ospina, 2015, p. 186).

Hans Kelsen en su obra titulada *Teoría Pura del Derecho* al analizar los enunciados jurídicos que integran los órdenes normativos señalo que el principio de imputabilidad es un

postulado ordenador que opera en el sistema como un enlace entre las condiciones y consecuencias que son establecidas por el órgano legislativo en las normas.

El mencionado autor señala al respecto que “la imputación no consiste en otra cosa sino en esa conexión entre el acto ilícito y su consecuencia” (Kelsen, 1994, p. 96), por tanto, lo que se examina al efectuar el proceso de imputación no es el enlace de determinada conducta con el hombre que la lleva a cabo, sino el enlace de determinada conducta con un delito y con su consecuencia punitiva.

Es decir, el uso del principio de imputación desde la perspectiva Kelseniana implica realizar un proceso de vinculación entre las condiciones y las consecuencias que fueron establecidas de forma expresa en las disposiciones normativas que integran el sistema.

Es necesario señalar en este punto que el principio de causalidad – a diferencia del principio de imputación – relaciona la causa y el efecto, por lo cual establece un imperante abismo entre las leyes naturales que han constituido las innumerables teorías metafísicas del derecho y la teoría pura que establece el aspecto de cientificidad del derecho en tanto ciencia racional. Kelsen señala al respecto que:

La distinción lógica entre ser y deber ser y la imposibilidad de pasar mediante una deducción lógica del campo del uno al otro, es una de las posiciones esenciales de la *teoría pura del derecho*. Esta es una teoría de lo que jurídica y positivamente debe ser, no de lo que naturalmente es; su objeto son normas, no la realidad natural. Por lo tanto se distingue del derecho natural en que no quiere conocer como este último, lo que el derecho debe ser si no lo que el derecho es; es una teoría del derecho

positivo, es decir una teoría del derecho real y no del derecho ideal, una teoría de la realidad jurídica (Kelsen, 2003, p. 14)

Es decir el principio de imputación se diferencia el principio de causalidad principalmente porque el primero establece una relación entre condición y consecuencia que se determina por la aplicación de una norma, lo cual significa que se realiza por un acto de tipo volitivo humano.

Por su parte, el principio de causalidad establece una relación entre la condición y la consecuencia, lo cual en la praxis resulta ser independiente de cualquier acto humano, por lo tanto, la imputación establece un nexos normativo más no causal. La imputación es entonces “una operación mental que no está restringida el pensamiento jurídico, es el fundamento de cualquier cognición cuyo objeto es un orden normativo de la conducta humana o de una sociedad constituida por un orden normativo” (Kelsen, 1982, p. 92)

Por su parte, el perjuicio ha sido considerado como “el reflejo del daño, que se proyecta en la esfera material o inmaterial del sujeto (...) es objeto de indemnización cuando se configuran los elementos de la responsabilidad patrimonial, siempre que se pruebe su existencia y cuantía” (Henao & Ospina, 2015, p. 273), es decir, el perjuicio es un concepto que es diferente al daño antijurídico pero que se encuentra estrechamente unido a él, que debe ser cierto o determinado pues, puede llegar a proyectarse a futuro y que, necesariamente debe ser particular y de origen anormal producto de inconvenientes propios del funcionamiento del sistema, el cual, claro está se encuentra protegido jurídicamente porque recae sobre bienes legítimos de las personas que actúan como demandantes.

En vista de todo lo anteriormente investigado, analizado y examinado, es dable concluir esta parte inicial de la investigación señalando que la estructura de la responsabilidad del Estado en el contexto jurídico colombiano, establecida en el artículo noventa superior en el cual se establece que “el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas” (Asamblea Nacional Constituyente, 1991) se encuentra comprendida por el daño antijurídico y por la imputación, la cual incluye la imputación fáctica o *imputatio facti* en donde se analiza la acción u omisión de la autoridad pública y, la imputación jurídica o *imputatio iure* que se efectúa por medio de la determinación del título de imputación subjetivo u objetivo aplicable para los casos concretos, y que, estructura él debe de reparar el daño antijurídico.

2. La administración de justicia, la resolución de controversias y el control del ordenamiento jurídico legal y constitucional.

La Administración de Justicia en el ordenamiento jurídico colombiano ha sido considerada como una parte fundamental y esencial de la función pública que cumple el Estado – tal y como se establece en el artículo 228 superior – que se ejecuta por medio de la aplicación de la desconcentración administrativa a través de la división en unidades territoriales para efectos judiciales, las cuales son los Distritos, Circuitos y Municipios.

Al respecto el alto tribunal en materia constitucional ha señalado que la administración de justicia se configura en el sistema normativo colombiano como “un mandato de que las decisiones sean independientes; un mandato de publicidad y permanencia de sus actuaciones; un mandato de prevalencia del derecho sustancial; una obligación de cumplir los términos procesales; y un mandato de desconcentración y autonomía” (Corte Constitucional, 2015), el cual, implica la garantía de la confianza legítima en la actividad del Estado como administrador de justicia, por lo cual es necesario tener en cuenta que:

Esta confianza no se garantiza con la sola publicidad del texto de la ley, ni se agota en la simple adscripción nominal del principio de legalidad, comprende además la protección a las expectativas legítimas de las personas de que la interpretación y aplicación de la ley por parte de los jueces va a ser razonable, consistente y uniforme (Corte Constitucional, 2001)

De ello es dable inferir que la administración de justicia es un postulado que por su contenido axiológico posee características de derecho y de principio de categoría fundamental, los titulares son todas las personas nacionales o extranjeras, físicas o jurídicas, pues estas últimas también tienen intereses legítimos que merecen protección. Ahora bien, desde la perspectiva semántica ha sido definida como “la acción de los tribunales a quienes pertenece exclusivamente la potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles y criminales y cuyas funciones son juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado” (Espasa, 1999, p. 198).

Por su parte, la doctrina jurídica ha señalado al respecto que la administración de justicia ha “pertenecido siempre al núcleo duro de las funciones estatales y, en consecuencia, dejan muy poco margen de apreciación al legislador a la hora de regular el acceso a la prestación y el contenido de la misma” (Picazo, 2003), en ese sentido, opera en el sistema como un “derecho a la jurisdicción como instrumento para hacer valer sus derechos y obtener una satisfacción de éstos a través de la decisión judicial” (Bernal, 2005, p. 335). Siguiendo dicha línea argumental Bartolomé, afirma que este derecho constituye un derecho de contenido amplio que no se agota en la exigencia de que:

El interesado tenga acceso a los tribunales de justicia y pueda incoar y defender una pretensión jurídica con igualdad frente a otras partes procesales, agotando todos los medios procesales admisibles; tampoco se limita solo a garantizar la obtención de un fallo sobre el fondo del asunto fundado en derecho; exige también que este se cumpla y que el recurrente sea repuesto en su derecho íntegramente (2003, p. 222)

En vista de lo anteriormente señalado, es necesario realizar un breve análisis del concepto de los derechos fundamentales, pues como lo señala la Corte Constitucional, la administración de justicia es un derecho de categoría fundamental que merece ser salvaguardado, en tanto, constituye uno de los pilares fundamentales del Estado Social y Democrático de Derecho que fue establecido por el constituyente derivado en el año de 1991.

La perspectiva doctrinal que estructura la Teoría y Filosofía del Derecho, ha definido los derechos fundamentales como “derechos singulares que adquiere cada individuo con exclusión de los demás son universales, indispensables, inalienables atribuidos por normas jurídicas a todos en cuanto personas, ciudadanos o capaces de obrar dentro de un Estado” (Ferrajoli, 2008, p. 61), o como aquellas “normas de derecho fundamental expresadas a través de disposiciones iusfundamentales entendiéndose por éstas exclusivamente enunciados contenidos en el texto de la ley fundamental” (Alexy, 1993, p. 62).

También han sido considerados como “derechos que le son inherentes al hombre y que, lejos de nacer de una concesión de la sociedad política, han de ser por ésta consagrados y garantizados” (Tobéñas, 1968, p. 11) que, en el sentido riguroso del término, constituyen “cartas de triunfo contra las mayorías y la persecución del bienestar colectivo” (Dworkin, 1984, p. 65). Desde la interpretación realizada por Fernández (1992) son derechos fundamentales aquellos:

Elementos del ordenamiento jurídico, esto es, normas jurídicas objetivas que forman parte de un sistema axiológico que aspira a tener validez, como decisión jurídico constitucional, para todos los sectores del Derecho (...) Con ello, los derechos han establecido una especie de vínculo directo

entre los individuos y el Estado, operando en último término como fundamento de la propia unidad política (p. 164)

Por tanto, los derechos fundamentales son “la expresión positiva de los derechos humanos” (Galán, 2016, p. 38) que adquieren una dimensión positiva en las constituciones nacionales de los Estados democráticos constitucionales y que “por lo general representan un intento de transformar los derechos humanos en derecho positivo” (Velasco & Llano, 2017, p.38).

Precisado lo anterior, es necesario entonces, señalar que el derecho fundamental a la administración de justicia es un postulado constitucional que establece en el ámbito jurídico colombiano la posibilidad de que todas las personas residentes en Colombia acudan en igualdad de condiciones ante los operadores judiciales para solicitar la salvaguarda del orden jurídico y constitucional y para solicitar la protección o restablecimiento de los derechos que le han sido transgredidos, lo anterior, claramente con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos por parte del órgano legislativo y, con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y en la ley.

No obstante, en la praxis judicial se han venido presentado una serie de casos en los cuales la administración de justicia ha operado de forma defectuosa, tardía o anormal causando daños antijurídicos a las personas que desean satisfacer el ejercicio de dicho derecho fundamental de forma real y efectiva. Dichos perjuicios derivados de la ocurrencia del daño antijurídico son causados por las acciones u omisiones de las autoridades judiciales, y deben ser reparados según lo estipulado en la regla general de responsabilidad patrimonial consagrada en la Constitución

Política, cuyo artículo 90 establece el deber de reparar los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

Con la finalidad de regular y armonizar el sistema legal colombiano al marco constitucional establecido por la Asamblea Nacional Constituyente en la Constitución, el Congreso de la República expidió en el año 1996 la ley Estatutaria de Administración de Justicia – también conocida como ley 270 – la cual estableció de forma expresa los supuestos frente a los cuales nace a la vida jurídica la responsabilidad patrimonial del Estado y de sus funcionarios y empleados judiciales, en ese sentido preceptúa en los artículos 66, 68 y 69 que es procedente imputar responsabilidad al Estado colombiano cuando exista error jurisdiccional, privación injusta de la libertad y, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en donde, el daño no proviene de una decisión judicial, sino de la función jurisdiccional efectuada por los operadores judiciales.

Según la doctrina, el funcionamiento anormal de la administración de justicia está referido a unos estándares de lo que se considera un funcionamiento normal, por tal motivo, el análisis del concepto de funcionamiento anormal de la Administración de Justicia debe realizarse teniendo como premisa aquellos estándares que han sido considerados como indispensables para el funcionamiento, es decir:

No todo funcionamiento anormal, no toda deficiencia en la Administración de Justicia, son generadores de responsabilidad, sino aquellos que no van acordes con unos patrones básicos de eficacia y funcionamiento de acuerdo con las necesidades sociales y los intereses de los justiciables.

El concepto de funcionamiento anormal es ajeno a toda idea de culpa o negligencia aunque tenga en éstas su origen y se basa únicamente en la causación del daño que actúa como factor desencadenante de la imputación (Andrés & Movilla, 1986, p. 358)

En vista de lo anteriormente señalado, para resolver si en un caso concreto hay lugar a la responsabilidad del Estado por fallas en la administración de justicia derivadas del retardo en adoptar decisiones de tipo judicial, debe analizarse si dicho retardo estuvo o no justificado, lo cual se determinará teniendo en cuenta la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, la forma como haya sido llevado el caso, el volumen de trabajo que tenga el despacho de conocimiento, entre otros aspectos que motivan al alto tribunal en lo contencioso administrativo a afirmar que es un asunto “que hay que tratar no desde un Estado ideal sino desde la propia realidad de una administración de justicia con problemas de congestión, derivados de una demandada que supera la limitación de recursos humanos y materiales disponibles para atenderla” (Consejo de Estado, 2012). De igual forma, ha precisado el máximo Tribunal Administrativo que son múltiples las actuaciones u omisiones en desarrollo de la actividad jurisdiccional que pueden dar lugar a responsabilidad del Estado, así pues:

El origen del daño se halla en un trámite que no envuelve decisión alguna por parte del funcionario judicial, sino que constituye apenas una actuación administrativa adelantada en el desarrollo de un proceso judicial, que puede calificarse, por lo tanto, como un evento de defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia que se enmarca dentro de la teoría general de la falla del servicio y por el cual, de encontrarse probado, puede deducirse la responsabilidad patrimonial de la Nación, si además se acredita el daño antijurídico que con el mismo se hubiere causado (Consejo de Estado, 2010)

De conformidad con lo anterior, es dable concluir señalando que la responsabilidad extracontractual del Estado, derivada de la función jurisdiccional, no se limita solamente a la actividad estatal, pues puede originarse en las actividades accesorias que estén asociadas a la administración de justicia, motivo por el cual es dable afirmar que es posible que el daño antijurídico se origine en conductas activas u omisivas de funcionarios o empleados que no ejerzan necesariamente función jurisdiccional, pero que se relacionen con ésta de manera directa o indirecta. Por lo tanto, el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia constituye un régimen de responsabilidad patrimonial del Estado, que permite atribuir o asignar daños antijurídicos derivados de multiplicidad de causas, de acciones u omisiones de diversos funcionarios o empleados, o de particulares que participan a lo largo del proceso judicial.

3. Medios de control y defectuoso funcionamiento de la administración de justicia

Ocasionado el daño antijurídico a los individuos incurso en un proceso judicial, surge la necesidad de acudir al aparato jurisdiccional esta vez para que las acciones u omisiones constitutivas de falla, que se presentaron con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia – que pueden provenir no sólo de los funcionarios, sino también de los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, de los empleados judiciales, de los agentes y de los auxiliares judiciales – sean analizadas por parte del operador judicial con la finalidad de que se reparen los daños antijurídicos y consecuentes perjuicios causados.

Lo anterior – como se explicó en la parte intermedia de la investigación – teniendo como sustento o fundamento por un lado el artículo 90 de la Constitución, el cual estipule de forma tácita la denominada cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, de la que se desprenden como elementos indispensables la generación de un daño antijurídico causado a un administrado y la imputación del mismo a la administración pública, tanto por su acción como por su omisión y por otro lado, la premisa según la cual “todo acto de comportamiento del servicio de la justicia que haya tenido incidencia sobre los derechos de las personas y con relación a la función judicial, debe poder fundar la responsabilidad del Estado” (Sabourault, 2010, p. 94).

En ese orden de ideas, resulta conveniente precisar que el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia constituye una falla del servicio por el mal servicio administrativo, por lo cual el título de imputación aplicable para el caso será el del régimen subjetivo denominado falla en la prestación del servicio, pues las actuaciones administrativas de la jurisdicción son las que

originan el actuar culposos del Estado, no obstante, puede llegar a ser posible que la imputación se realice desde el punto de vista objetivo.

Ahora bien, el medio de control procedente para activar el sistema jurisdiccional administrativo en este caso es el de reparación directa que fue estipulado por el órgano legislativo en el artículo 140 de la Ley 1437 de 2011, denominada Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el cual se estipula de forma expresa que:

“En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado (...) De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma (...) Las entidades públicas deberán promover la misma pretensión cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública (...) En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño” (Congreso de Colombia, 2011).

Al respecto, es importante señalar que desde el paradigma doctrinal este medio de control ha sido considerado como una acción “de naturaleza subjetiva, individual, temporal y desistible, en donde la persona lesionada o afectada (...) podrá solicitar directamente ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo que se repare el daño causado y se le reconozcan las demás

indemnizaciones que correspondan” (Santofimio, 2004, p. 211), por tanto, es dable afirmar que es una acción que tiene como finalidad lograr la indemnización patrimonial o pecuniaria de aquellas personas que hayan sufrido un daño antijurídico que tenga origen en el defectuoso y anormal funcionamiento de la administración de justicia.

Finalmente, es importante tener en cuenta que para determinar el momento en el cual ha de efectuarse el cómputo del término de caducidad de la acción de reparación directa para el caso del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se debe tener como punto de referencia el día siguiente a aquel en el que el demandante tuvo conocimiento del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia a que alude en la demanda de reparación directa.

Conclusiones

- El indebido funcionamiento de la Administración de Justicia se produce en las actuaciones judiciales que son consideradas como necesarias para adelantar el proceso o la ejecución de las providencias judiciales.
- Dentro del concepto de indebido funcionamiento de la Administración de Justicia se encuentran comprendidas todas las acciones u omisiones constitutivas de falla, que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia, que puede provenir no sólo de los funcionarios, sino también de los particulares investidos de facultades jurisdiccionales.
- La responsabilidad por funcionamiento anormal de la administración de justicia se produce en las actuaciones judiciales necesarias para el realizar el juzgamiento o la ejecución de las decisiones judiciales.
- Deben incluirse en el régimen establecido para la responsabilidad por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia las actuaciones que se efectúen en el ámbito propio de la actividad necesaria para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado o para garantizar jurisdiccionalmente algún derecho.
- La responsabilidad extracontractual del Estado, asociada a la función jurisdiccional, no se limita solamente a la actividad estatal, pues puede tener su génesis en las actividades accesorias que estén asociadas a la administración de justicia.

- El título de imputación procedente para solicitar la reparación de los daños antijurídicos causados a los particulares con ocasión del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia según lo estipulado por el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo es la falla en la prestación del servicio, sin embargo, dicha posición no es estática ya que puede variar por los elementos especiales y específicos del caso, mutando al régimen objetivo.

REFERENCIAS

- Acciarri, H. (2013). El análisis económico del derecho de daños. Una aproximación general. En C. Bernal, & F. Jorge, *La filosofía de la responsabilidad civil. Estudios sobre los fundamentos filosófico-jurídicos de la responsabilidad civil extracontractual* (págs. 421-451). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
- Agudelo, O. (Enero - Junio de 2013). El cálculo de las acciones. *Novum Jus: Revista Especializada en Sociología Jurídica y Política*, 7(1), 1-150.
- Alchourron, C., & Bulgin, E. (1991). *Sobre la existencia de normas jurídicas*. México: Fontamara.
- Alexy, R. (1993). *Teoría de los derechos fundamentales*. (E. G. Valdés, Trad.) Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.
- Alexy, R. (2003). *Tres escritos sobre los derechos fundamentales y la teoría de los principios*. (C. B. Pulido, Trad.) Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
- Andrés, P., & Movilla, C. (1986). *El Poder Judicial*. Madrid: Tecnos.
- Aristóteles. (1992). *Ética Nicomachea*. México: Porrúa.
- Asamblea Nacional Constituyente. (10 de Octubre de 1991). Constitución Política de Colombia. *Gaceta Constitucional* (114).

Ballesteros, Á. (2007). *Manual de responsabilidad patrimonial de los entes locales*. Madrid: La Ley.

Bartolomé, C. (2003). *Derechos fundamentales y libertades públicas*. Valencia: Tirant lo Blanch.

Bascuñán, A. (1997,). *Tratado de derecho constitucional* (2° ed., Vol. IV). Santiago de Chile: Ediciones Jurídica.

Bernal, C. (2005). *El derecho de los derechos*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Bernal, C. (2013). ¿Es el derecho de daños una práctica de justicia correctiva? En P. M, *Derecho de daños, principios morales y justicia social* (págs. 81-99). Madrid: Marcial Pons.

Bernal, C., & Fabra, J. (2013). *La Filosofía de la Responsabilidad Civil*. Bogotá: Universidad Externado.

Bobbio, N. (1985). El poder y el Derecho. En N. Bobbio, & M. Bovero, *Origen y fundamentos del poder político* (págs. 19-36). México: Grijalbo.

Causland, M. (2013). Responsabilidad del Estado por daños causados por actos violentos a terceros. En C. Bernal, & J. Fabra, *La filosofía de la responsabilidad civil. Estudio sobre los fundamentos filosófico- jurídicos de la responsabilidad civil extracontractual* (págs. 519-522). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Congreso de Colombia. (15 de Marzo de 1996). Ley 270, Ley Estatutaria de Administración de Justicia. *Diario Oficial* (42745), págs. 1-26.

Congreso de Colombia. (18 de Enero de 2011). Ley 1437, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. *Diario Oficial*, CXLV (47956).

Consejo de Estado. (1999). *Exp. 10922. Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez*. Bogotá.

Consejo de Estado. (2010). *Expediente: 17301. Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez*. Bogotá.

Consejo de Estado. (2012). *Fallo 21861. Expediente: 05001232500019942279 01. Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez*. Bogotá.

Consejo de Estado. (2014). *Radicación: 66001-23-31-000-1999-00435-01 (24.809), Consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa*. Bogotá.

Corte Constitucional. (2001). *Sentencia C - 093, Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero*. Colombia.

Corte Constitucional. (2015). *Sentencia C - 284, Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo*. Bogotá.

Díaz, E. (1998). *Estado de derecho y sociedad democrática*. Madrid: Taurus.

Diccionario Jurídico Espasa. (1999). Madrid: S.L.U.Espasa Libros.

Drago, R. (1986). Algunas reflexiones sobre la responsabilidad de la Administración pública en Francia. *Responsabilidad de la Administración pública en Colombia Francia e Italia*.

- Dworkin, R. (1977). *Los Derechos en Serio*. (M. Guastavino, Trad.) Madrid: Ariel Derecho.
- Dworkin, R. (1984). *Los derechos en serio*. Barcelona: Ariel.
- Fernández, F. (1992). *El sistema constitucional español*. Madrid: Dykinson.
- Ferrajoli, L. (2004). *Derechos y Garantías, La Ley del más débil*. Madrid: Trotta.
- Ferrajoli, L. (2008). *Democracia y Garantismo*. (M. Carbonell, Ed.) Madrid, España: Trotta.
- Galán, A. (2016). Los derechos humanos fundamentados mediante la legitimación y la moral jurídica. *Novum Jus: Revista Especializada en Sociología Jurídica y Política*, 10 (1), 31-48.
- García de Enterría, E., & Fernández, T. (2004). *Curso de Derecho administrativo*. Madrid: Civitas.
- García de Enterría, E., & Ramón, F. T. (1986). *Curso de Derecho Administrativo* (Vol. II). Madrid: Civitas.
- Gardner, J. (2013). La justicia correctiva corregida. En M. Papayannis, *Derecho de daños, principios morales y justicia social* (págs. 39-60). Madrid: Marcial Pons.
- Gil, E. (2010). *Responsabilidad Extracontractual del Estado* (4ta ed.). Bogotá: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez.
- Gil, E. (2013). La teoría de la imputación objetiva en la responsabilidad extracontractual del Estado en Colombia. En C. Bernal, & J. Fabra, *La filosofía de la responsabilidad civil* (págs. 470-490). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Gil, E. (1989). *Responsabilidad Contractual de la Administración Pública*. Bogotá: Temis.

Heller, H. (1942). *Teoría del Estado*. México: Fondo de Cultura Económica.

Henao, J. C. (1998). *El daño* (1° ed.). Bogotá: Universidad Externado.

Henao, J. C., & Ospina, A. (2015). *La responsabilidad extracontractual del Estado*. Bogotá: Universidad externado de Colombia.

Hinestrosa, F. (2016). *Responsabilidad extracontractual: Antijuridicidad y Culpa*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Jiménez, W., & Soler, I. (2012). Causas de ineficacia de la Acción de Repetición en Colombia y sus posibles correctivos. *Revista Diálogos de Saberes* (36), 65-80.

Kelsen, H. (1958). *Teoría General del Derecho y del Estado* (2da ed.). (E. G. Máynez, Trad.) México: Textos Universitarios UNAM.

Kelsen, H. (1982). *La Teoría Pura del Derecho*. (R. Vernengo, Trad.) México: UNAM.

Kelsen, H. (1994). *Teoría Pura del Derecho* (2° ed.). (M. Nilve, Trad.) Buenos Aires: Eudeba.

Kelsen, H. (2003). *¿Qué es la teoría pura del Derecho?* (9 ed.). (E. G. Valdés, Trad.) Madrid: Fontamara.

Marías, J., & Araujo, M. (1985). *Aristóteles*. México: Centro de Estudios Constitucionales.

Oviedo, C. (1943). *Derecho Administrativo. Introducción. Doctrina General. Organización Administrativa* (Vol. I). Madrid: Librería General de Victoriano Suárez.

Parra, W. (2003). *Responsabilidad patrimonial del Estado. Daño antijurídico*. Bogotá: Universidad Autónoma de Colombia.

Penagos, G. (1989). *Curso de Derecho Administrativo. Parte especial aumentada y actualizada* (2da ed., Vol. II). Bogotá: Ediciones librería del profesional.

Penagos, G. (1997). *El daño antijurídico*. Bogotá: Doctrina y Ley.

Picazo, L. M. (2003). *Sistema de derechos fundamentales*. Madrid: Thomson-Civitas.

Porrúa, F. (1999). *Teoría del Estado* (32 ed.). México: Porrúa.

Ramírez, E. (2010). *Responsabilidad del Estado por el Hecho del Legislador: análisis jurisprudencial y doctrinal*. Bogotá: Ibáñez Editores.

Real Academia Española. (17 de Octubre de 2014). *Diccionario de la lengua española*, 23.ª ed., Madrid. Recuperado el 10 de Octubre de 2016, de <http://dle.rae.es/?id=0oKpOJX>

Saavedra, R. (2003). *La responsabilidad extracontractual de la administración pública*. Bogotá: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez.

Saavedra, R. (2005). *La responsabilidad extracontractual de la Administración Pública*. Bogotá: Ediciones Jurídicas Ibáñez.

Sabourault, D. (2010). *La responsabilidad del servicio público de la justicia en Bélgica*. Bogotá: Universidad de Santo Tomás.

Responsabilidad el Estado colombiano por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia

Santofimio, J. O. (2004). *Tratado de Derecho Administrativo* (Vol. III). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Soto, M. (2011). *La invención del Derecho en Aristóteles*. Madrid: Dykinson.

Tobeñas, C. (1968). *Los Derechos Humanos*. Madrid: Editorial Tecnos.

Velasco, N., & Llano, J. (Febrero de 2017). *Derechos fundamentales: Un debate desde la argumentación jurídica, el garantismo y el comunitarismo*. *Novum Jus: Revista Especializada en Sociología Jurídica y Política*, 10(2), 35-55.